

EL MUNDO

Jueves, 30 de septiembre de 2004. Año XV. Número: 5.409.

OPINION

TRIBUNA LIBRE

Verdades que merece la pena atreverse a revelar

DANIEL ELLSBERG

En una grabación magnetofónica realizada el 14 de junio de 1971, puede oírse la mención que H. R. Haldeman, el jefe de Personal de Richard Nixon, hace de Donald Rumsfeld, por aquel entonces uno de los miembros del gabinete político de la Casa Blanca, acerca de las consecuencias de los denominados Papeles del Pentágono y en relación con informaciones que se habían publicado aquella misma mañana en la primera página de los periódicos: «Rumsfeld llamaba la atención esta mañana sobre un punto. Para un tipo normal y corriente, todo esto no es más que la típica jerga enrevesada de unos burócratas. Ahora bien, de esa jerga incomprensible se desprende con claridad meridiana una cosa: que no te puedes fiar del Gobierno, que no te puedes creer lo que dice y que no puedes confiar en sus opiniones. Lo que queda fatalmente deteriorado con ello es la infalibilidad implícita de los presidentes, que ha sido una cosa que nadie ha puesto jamás en duda en Estados Unidos, porque hacerlo pone de manifiesto que hay personas que hacen cosas que el presidente quiere que se hagan aunque no esté bien hacerlas, y también evidencia que el presidente puede que no haga bien las cosas».

Había captado a la perfección el meollo del asunto. Sin embargo, se trata de una lección que tienen que aprender por sí mismos, tanto cada nueva generación de electores como cada nueva oleada de dirigentes. Quizás el señor Rumsfeld, que en la actualidad es secretario de Defensa, se haya visto reflejado recientemente en esta afirmación incontrovertible al contemplar cómo se deterioran las circunstancias en Irak. Según la propia información del Gobierno, la situación en el país es mucho menos halagüeña de lo que el señor Rumsfeld ha admitido o de lo que el presidente Bush ha reconocido en medio de la campaña electoral.

Es comprensible que los norteamericanos se resistan a creer que su presidente ha cometido errores de juicio que han costado vidas norteamericanas. Para

convencerles de lo contrario no hay otro recurso que pruebas contundentes: documentos, fotografías, transcripciones. A menudo, la única forma de que tales pruebas lleguen a la opinión pública consiste en que un funcionario público consecuente con su deber decida darlas a conocer sin permiso.

Eso fue lo que ocurrió recientemente con la filtración de la Evaluación de la Información Nacional sobre Irak, que había sido redactada en julio. Las informaciones sobre la existencia de este documento y sobre su pesimismo generalizado (aunque no sobre sus auténticas conclusiones) impulsaron un debate que debería haberse celebrado mucho antes sobre las realidades y perspectivas de la guerra. Sin embargo, siguen sin darse a conocer sus conclusiones sobre lo que, en coherencia con todo ello, es más probable que ocurra, y sobre la fuerza de las pruebas que apuntan a que ocurra lo peor. Puesto que la Casa Blanca se ha negado a facilitar el informe en su integridad, alguien debería hacerlo.

A los autores de filtraciones suele acusárseles de partidistas y no cabe duda de que muchos de ellos lo son. Sin embargo, la medida de su patriotismo debería ser la exactitud y la importancia de la información que revelen. Habría que considerar un servicio público de primera magnitud la revelación de la verdadera dimensión de los planes del Gobierno respecto de Irak, especialmente antes de que se produzca el debate de esta semana entre el señor Bush y el senador John Kerry sobre política exterior.

Deberían hacerse públicas las auténticas estimaciones del Ejército sobre los costes previstos de los diversos planes sobre Irak a largo plazo (en términos de recursos humanos, financiación y bajas), además de los costes más inmediatos en vidas norteamericanas e iraquíes de las ofensivas planeadas en coincidencia con el mes de noviembre, para someter las ciudades resistentes de Irak. Si los expertos del Ejército o de los servicios de espionaje con que cuenta el Gobierno pronostican consecuencias políticas desastrosas en Irak como resultado de este tipo de ataques urbanos, esas opiniones no deberían mantenerse en secreto.

Las filtraciones sobre el calendario previsto de esta ofensiva (y sobre la posible llamada de reservistas a filas justo después de las elecciones) me hacen remontarme a la cita con las urnas en 1964, día que pasé formando parte de un grupo de trabajo de diversos organismos de la Administración en el Departamento de Estado. El objeto de nuestra reunión era examinar los planes de propagación de la guerra a otras zonas, que era precisamente la política que los electores rechazaron en las urnas de manera rotunda aquel día.

No podíamos esperar a tener la reunión al día siguiente porque los planes para bombardear Vietnam del Norte tenían que estar listos tan pronto como fuera

posible. Lo que ocurre es que tampoco podríamos haber celebrado la reunión el día anterior porque quizá se habría filtrado alguna noticia al respecto (no por mí, siento decirlo). Por otra parte, el presidente Lyndon B. Johnson quizá no habría ganado de manera tan abrumadora si los electores hubieran sabido que mentía cuando afirmaba que su Gobierno no quería «una extensión de la guerra».

Siete años más tarde y después de cerca de 50.000 norteamericanos muertos, cuando yo ya había filtrado los Papeles del Pentágono, mantuve una conversación con Wayne Morse, senador por Oregón, uno de los dos que había votado en agosto de 1964 en contra de la resolución del golfo de Tonkin. Si yo hubiera filtrado los documentos entonces, la resolución nunca habría salido aprobada, me dijo.

Se me hizo muy duro oír aquello. Sin embargo, en 1964 no se me había pasado por la imaginación quebrantar mi compromiso de confidencialidad. Aunque yo era consciente de que la guerra era una equivocación, mis lealtades se dirigían por aquel entonces hacia el secretario de Defensa y hacia el presidente. Tuvieron que pasar cinco años de guerra antes de que llegara a darme cuenta de que todos los funcionarios sin excepción deben su lealtad, en su grado máximo, a la Constitución, al imperio de la ley, a los soldados en peligro y a sus conciudadanos.

Como Robert McNamara, a cuyas órdenes trabajé como funcionario, el señor Rumsfeld da la impresión de inspirar una gran lealtad entre sus colaboradores. Sin embargo, como ha puesto de manifiesto el escándalo de Abu Ghraib, hay principios más importantes. Es posible que el señor Rumsfeld no hubiera visto esas fotografías, imposibles de recusar, ni el informe del general de división Antonio M. Taguba en el momento en que lo hizo (exactamente igual que no habría llegado a ver jamás los Papeles del Pentágono hace 33 años) si alguna persona anónima de su propio departamento no se hubiera saltado la cadena de mando para darlas a conocer, sin autorización, a los medios de información. Por otra parte, de no haber mediado el conocimiento público del escándalo, las reformas habrían sido menos probables.

Un juez federal ha ordenado al Gobierno que facilite antes del 15 de octubre una lista de todos los documentos relacionados con el escándalo. ¿Va a hacer entrega el señor Rumsfeld de las fotos que aún no se han visto, que ilustran un trato que él mismo ha descrito como todavía peor? Es enormemente improbable, sobre todo antes del 2 de noviembre. Entretanto, el informe Taguba sigue clasificado como materia reservada en toda su integridad y todavía faltan por darse a conocer los descubrimientos realizados en el curso de otras investigaciones sobre interrogatorios y otras prácticas de los militares con

los detenidos.

Todos los gobiernos, sin excepción, declaran materia reservada mucha más información de la justificable en una democracia (y el Gobierno Bush ha sido particularmente opaco). La información no debería declararse secreta simplemente porque resulte comprometedor o incriminatoria. Sin embargo, en la práctica, tanto en éste como en cualquier otro Gobierno, ninguna otra información se guarda con mayor sigilo.

A buen seguro que en la actual Administración hay funcionarios que están convencidos de que Estados Unidos se ha visto arrastrado de manera fraudulenta a la Guerra de Irak, pero que hasta ahora han guardado silencio, tal y como yo mismo hice durante mucho tiempo sobre la Guerra de Vietnam. Reservo para ellos un mensaje personal: no caigan en los mismos errores que yo. No esperen a que envíen más soldados y a que mueran miles y miles de ellos antes de revelar unas verdades que podrían dar término a la guerra y salvar vidas humanas. Hagan lo que ojalá hubiera hecho yo en 1964: acudan a la prensa, al Congreso, y documenten sus denuncias.

Es posible que la tecnología haga hoy día que sea más fácil contar lo que cada uno quiera, pero la decisión de hacerlo por esta vía no entrañará menores dificultades. Son reales los riesgos personales de hacer revelaciones comprometedoras para los superiores de uno. Si alguien llega a ser identificado como fuente, habrá puesto fin a su carrera, los amigos le darán la espalda, incluso es posible que sufra persecución por la justicia. Ahora bien, hay unos 140.000 norteamericanos en Irak que arriesgan su vida a diario. Nuestra nación está necesitada con urgencia de que sus funcionarios den muestra de un valor moral comparable.

Daniel Ellsberg es autor de Secretos: memorias del Vietnam y de los documentos del Pentágono.

© Mundinteractivos, S.A.